

*Dos procesos de elección de altos cargos en medio de pugnas políticas.*

*Después de 50 años de relación comercial, concluye exportación de gas natural a Argentina.*

*10 millones de hectáreas incendiadas con impacto en territorios y fuentes de vida.*

## ELECCIONES JUDICIALES Y SELECCIÓN DEL FISCAL GENERAL, DOS PROCESOS EN MEDIO DE INTERESES PARTIDARIOS



Bolivia ha estado transitando por dos procesos de elección de altos cargos en medio de aparentes luchas partidarias, internas y con la oposición. La influencia del Movimiento al Socialismo (MAS) en las elecciones judiciales y en la selección del Fiscal General del Estado es significativa porque es el partido gobernante y, por lo tanto, tiene un impacto decisivo en el sistema político en general. La falta de independencia de la norma, la politización de los procesos de designación de altas autoridades y las divisiones internas del MAS contribuyen a la percepción de que la independencia de las instituciones judiciales está en riesgo, con consecuencias directas en su credibilidad y funcionamiento.

Vayamos por orden. Las elecciones judiciales, destinadas a elegir a los altos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional Plurinacional y otros órganos judiciales, así como la selección del Fiscal General del Estado, están reguladas por reglamentos que no dan garantías de independencia y transparencia, por decir lo menos.

En el caso de la preselección de magistrados judiciales, los reglamentos son elaborados por una Asamblea Legislativa con mayoría del MAS. Adicionalmente a esto, la ALP delega el proceso de preselección a comisiones conformadas, en su mayoría, por miembros del partido de gobierno que tienen el encargo de cumplir con intereses político partidarios, sin responder a estándares internacionales como la independencia, apego a la norma, transparencia o equidad.

En el caso de la elección de candidatos, esta vez a cargo del Órgano Electoral, los reglamentos tampoco garantizan transparencia ni participación porque al no tratarse de una elección política, el organismo electoral es el único que puede difundir méritos de los candidatos, restringiendo así el acceso a la información y poniendo en riesgo la confianza y legitimidad del proceso, lo que podría ser la causa de la emisión de más votos nulos y blancos que válidos, igual que en 2011 y 2017.

Sin embargo, no es el único problema de la normativa. La preselección ha dado como resultado una lista de 139 candidatos que ha sido entregada al Tribunal Supremo Electoral, con errores y omisiones relacionadas con la equidad de género y la participación indígena. Por su parte, el organismo electoral ha informado hasta el momento sobre 12 renuncias y 9 de éstas corresponden a mujeres. Pero no ha informado sobre el efecto de estas renuncias en las listas de las diferentes instancias del Órgano Judicial (porque podrían incumplir los requisitos de paridad) ni lo que sucederá con aquellos candidatos que renuncien o resulten inhabilitados hasta el 27 de noviembre, ya que podrían estar en cualquiera de las 2 papeletas que le entregarán a cada ciudadano para emitir su voto.

Sobre el Fiscal General, una figura clave en el sistema de justicia boliviano, su elección también pasa por la Asamblea Legislativa, provocando una clara politización del proceso. La normativa es la misma que

para la elección de otros altos cargos y, por lo tanto, no logra un proceso independiente y riguroso, ya que presenta vicios desde el inicio: desorganización, improvisación en la metodología, manejo poco pulcro de la documentación, falta de equidad en la consideración de las postulaciones y un examen que denota la pobre participación de las universidades porque no permite conocer las capacidades de los postulantes. Está claro que un proceso con estas características podría socavar la imparcialidad y la independencia del Ministerio Público, agravado además por los intereses de cada facción del MAS, que podría apoyar a un candidato que priorice la defensa de sus intereses. De ser así, existe el riesgo de interferencias en investigaciones de casos sensibles, relacionados con corrupción o casos de abusos de poder que involucren a miembros del partido gobernante. En el caso de la reciente elección del nuevo Fiscal General, éste obtuvo 115 votos, con respaldo de parlamentarios del ala evista y ala arcista, así como algunas facciones de partidos de la oposición.

En este escenario, sin independencia ni equilibrio entre los Órganos del Estado y tensionado por las presuntas pugnas internas del Movimiento al Socialismo, a 63 días de iniciado el proceso de las elecciones judiciales, el Tribunal Supremo Electoral enfrenta fallos constitucionales que podrían paralizar el proceso como respuesta a errores u omisiones causadas por una normativa con vacíos que permite la libre interpretación y manipulación, sin la garantía del cumplimiento de derechos y la cautela del bien mayor, como es resolver la autoprórroga de los actuales magistrados que ocupan altos cargos en la justicia.



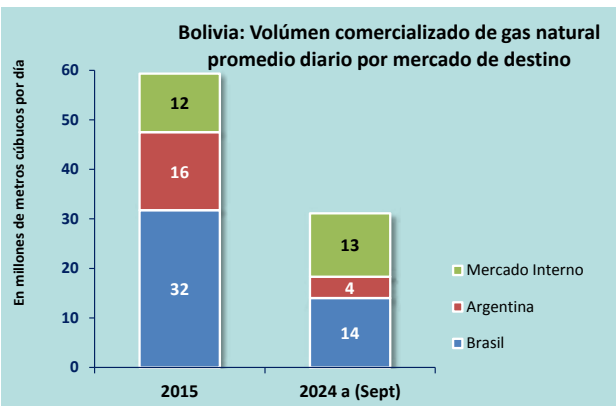
## DESPUÉS DE 50 AÑOS DE RELACIÓN COMERCIAL, CONCLUYE EXPORTACIÓN DE GAS NATURAL A ARGENTINA

El pasado 18 de septiembre, Argentina decidió terminar de manera anticipada el último contrato que tenía suscrito con Bolivia. Esta decisión responde a que el gobierno argentino advirtió, el año 2016, que el país venía disminuyendo su producción de gas natural, debido a la falta de exploración, y como resultado de una política hidrocarburífera rentista que olvidó la sostenibilidad sectorial de largo plazo.

Ese año, Bolivia tuvo que pagar una multa de dos millones de dólares por incumplimientos en el envío de los volúmenes comprometidos de gas natural a Argentina. En consecuencia, el gobierno en funciones del vecino país inició la planificación de un proyecto que permitiera sustituir el gas natural importado desde Bolivia con producción del yacimiento argentino de Vaca Muerta, lo que finalmente concluyó a fines de septiembre de la presente gestión.

Una debilidad que fue advertida desde el año 2015, tanto por Fundación Jubileo como por varios analistas, radicaba en que el país contaba solo con Brasil y Argentina como mercados de exportación para el gas natural, lo que debilitaba la posición negociadora del país y por ello era importante conseguir un tercer mercado. Lamentablemente, la sugerencia tampoco fue escuchada por las autoridades de turno.

En la actualidad, el cierre del mercado argentino para el gas natural boliviano implica una pérdida de cerca de 600 millones de dólares anuales; pero, además, coloca al país en una posición muy delicada ya que se queda con un solo comprador que es Brasil, el que terminará poniendo las condiciones de compra. Adicionalmente, debido a que la producción de gas natural en Bolivia continúa en caída, la cantidad que se vendía a Argentina es la que el país dejará de producir el año 2025, por lo que dichos ingresos no podrán ser recuperados.





## 10 MILLONES DE HECTÁREAS INCENDIADAS CON IMPACTO EN TERRITORIOS Y FUENTES DE VIDA

En los últimos años, Bolivia ha enfrentado una crisis ambiental debido a incendios forestales que afectan a bosques y comunidades. Este problema se atribuye a factores climáticos, actividades humanas y a un marco normativo que favorece la expansión agrícola, lo que ha incrementado la deforestación y la degradación ambiental.

Durante este 2024, se ha registrado un aumento significativo de incendios en comparación con años anteriores, afectando millones de hectáreas y dañando la biodiversidad, los recursos hídricos y la calidad del aire. Uno de los factores detrás de estos incendios es la práctica del chaqueo, utilizada para despejar tierras para la agricultura y la ganadería, que se descontrola en ausencia de medidas preventivas efectivas.

### FUEGOS ACTIVOS

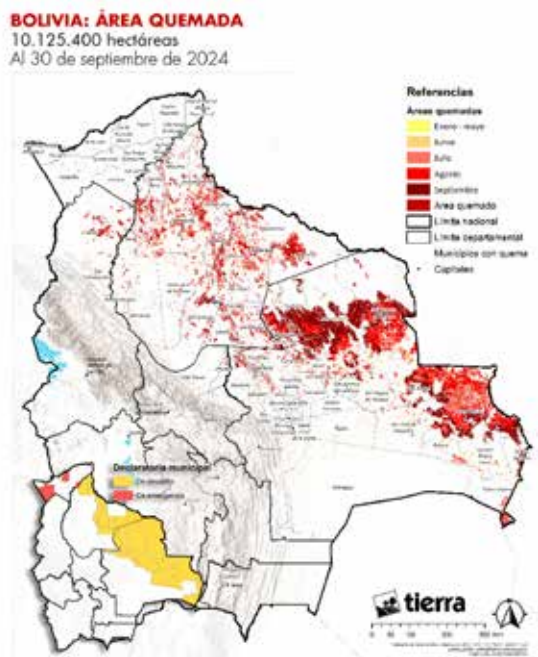
Dos reportes técnicos estiman que los incendios en Bolivia consumieron 10 millones de hectáreas. Los fuegos aún están activos y persisten los vientos y la sequía.

La Fundación Tierra, organización no gubernamental, calculó en 10,1 millones de hectáreas consumidas por el fuego, hasta el 30 de septiembre, de las cuales 6 millones de hectáreas corresponderían a bosques, superando los récords de años anteriores.

Por su parte, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), entidad estatal, informó que las cicatrices de quema se expandieron por 9,8 millones de hectáreas, hasta el 8 de octubre. De esta extensión, 61% corresponde a área boscosa.

La mayoría de los incendios no afectó a las grandes y medianas propiedades, sino principalmente a parques naturales, áreas protegidas, tierras comunitarias de origen (TCO), tierras indígenas originarias campesinas (TIOC) y tierras disponibles para asentamientos de nuevas comunidades.

La devastación de bosques y la afectación a tierras fiscales y de territorios comunitarios conlleva la hipótesis de que sectores interesados en ocupar y expandirse por nuevos territorios son los principales causantes de intensificar el fuego.



Clasificación Tierra	Total	%	Bosques	%	Pastizales	%
Tierra Fiscal	3.652.616	37%	2.562.644	70%	1.089.973	30%
Empresarial/Mediana	2.745.211	28%	892.398	33%	1.852.813	67%
TCO/TIOC	2.593.703	26%	2.058.720	79%	534.982	21%
Comunitaria	504.112	5%	338.999	67%	165.112	33%
Pequeña	180.416	2%	104.234	58%	76.182	42%
Ríos, caminos, A.Urb.	141.405	1%	70.822	50%	70.583	50%
Otros	13.755	0%	4.004	29%	9.751	71%
Total	9.831.219	100%	6.031.821	61%	3.799.396	39%

## PRINCIPALES NORMAS “INCENDIARIAS” Y CONSECUENCIAS:

- Ley 337 (2013): Destinada a regularizar tierras deforestadas ilegalmente. Esta ley buscaba equilibrar la producción agrícola y la restauración de bosques. Sin embargo, al ofrecer amnistías, incentivó la expansión de la frontera agrícola sin un compromiso claro hacia la reforestación.
- Ley 502 (2014) y Ley 739 (2015): Estas leyes ampliaron el plazo para acogerse a los beneficios de la Ley 337, otorgando más tiempo para la regularización de tierras deforestadas, lo que facilitó la conversión de áreas forestales en terrenos agrícolas.
- Ley 741 (2015): Autorizó el desmonte de hasta 20 hectáreas para actividades agrícolas y pecuarias, simplificando los trámites. Esta normativa impulsó el uso masivo del fuego para la expansión agrícola, resultando en un aumento de incendios que devastaron grandes áreas naturales.
- Ley 1171 (2019): Propuso un marco para el uso y manejo racional de quemas. Sin embargo, su falta de medidas estrictas y claras no ha logrado controlar el uso descontrolado del fuego, contribuyendo al aumento de incendios.
- Decreto Supremo 3973 (2019): Permitió el desmonte en Santa Cruz y Beni para actividades agropecuarias, flexibilizando aún más las regulaciones ambientales. Esta medida se considera una de las principales causas del incremento de incendios en Bolivia.

Recientemente, el gobierno anunció la derogación del Decreto Supremo 3973, considerado uno de los más dañinos para el medio ambiente. La presión social y ambiental logró la derogación de este Decreto, pero la crisis ambiental persiste.

## EL RIESGO DE QUE SE REPITA:

Bolivia necesita políticas más estrictas para controlar los incendios y promover prácticas agrícolas sostenibles, además de inversiones en reforestación y restauración de áreas afectadas. La inclusión de comunidades locales es esencial para proteger los recursos naturales.

Para evitar que en los próximos años los incendios vuelvan a causar desastres ambientales y afectaciones a territorios, fuentes de agua, calidad del aire, riesgos en la salud y otros impactos, organizaciones indígenas, campesinas, comunidades rurales y urbanas, e instituciones ambientalistas de sociedad civil –desde distintas iniciativas– plantean, entre las principales acciones:

- Derogar las leyes incendiarias y otras normas conexas.
- Establecer sanciones contra los responsables de las quemas (penales, económicas y de reversión de tierras).
- Determinar una pausa ecológica frente a quemas ilegales, sin afectación a pequeños productores, que permita la regeneración de las tierras afectadas.
- Promover la práctica del chaqueo sin quema.
- Consolidar las extensiones quemadas como tierras fiscales no disponibles para nuevos asentamientos.
- Fortalecer las iniciativas productivas agroecológicas y forestales.
- Abrir un debate multiactor sobre propuestas hacia un nuevo modelo de desarrollo, sin afectación a los bienes comunes.